

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



*“Al servicio de la justicia y de la paz social”*

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)  
*-Discutida y aprobada en sesión virtual de la fecha-*

PROCESO	VERBAL.
DEMANDANTE	LATIN AMERICAN POLYMERS LLC
DEMANDADA	SIGMAPLAS S.A.S.
RADICADO	05360 31 03 002 2020 00123 02
	INTERNO: 2023-031
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE ITAGÜÍ (ANT)
TEMAS Y	R.C.C. – EXISTENCIA CONTRATO COMPRAVENTA Y CUMPLIMIENTO
SUBTEMAS	
SENTENCIA	No 079
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Cumplido el término de traslado para sustentar y presentar alegaciones, procede el Tribunal, en aplicación de la Ley 2213 de 2022 que acogió como legislación permanente el Decreto 806 de 2020, a proferir sentencia por escrito, que resuelve la instancia, en atención al recurso presentado por la parte demandada en contra de la sentencia proferida en audiencia celebrada el 14 de febrero de 2023 por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ-ANTIOQUIA dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

La parte actora pretende que a través del presente proceso se hagan las siguientes declaraciones y condenas, que hace en la demanda y en la reforma: (carpeta 01PrimeraInstancia/archivo 03DemandaSigmaplas y 30.Escrito Subsanación Sigamaplas(sic)).

(i) Se DECLARE que entre el demandante y la demandada se celebró contrato de compraventa “*Formal Quote-Cotización 149058*” mediante el cual el demandante se comprometió a realizar la entrega de mercancías que se relacionan y, la demandada, se obligó a pagar la suma de USD\$184.624.

(ii) Se DECLARE que el demandante cumplió a cabalidad con las obligaciones, esto es, la entrega de la mercancía señalada.

(iii) Se DECLARE que la demandada incumplió con la obligación adquirida, no solo en el contrato de compraventa “*Formal Quote-Cotización 149058*”, sino, además, en la factura No 123402, pues a la fecha no ha realizado el pago de las mercancías.

(iv) Se CONDENE a la demandada a pagar a la demandante el valor de las mercancías entregadas conforme la factura No 123402 por USD\$164.618,05, equivalente en pesos colombianos a \$310'232.592.

(v) Se CONDENE a la demandada a pagar a la demandante los intereses comerciales moratorios sobre la suma de dinero mencionada, liquidados mes a mes a la tasa máxima legal vigente, desde el día en que la obligación se hizo exigible, 24 de septiembre de 2014, hasta el momento en que se efectúe el pago total de la obligación.

(vi) Se CONDENE a la demandada al pago de costas, agencias en derecho y gastos del proceso.

## **2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LAS PRETENSIONES**

Se narra en la demanda que el demandante, a través de su agente comercial, debidamente facultado para la fecha de los hechos, vendió a la sociedad SIGMAPLAS S.A.S. las mercancías que se relacionan (en el escrito de demanda no hay relación de mercancías pese a que se hace alusión a ella en varios apartes de dicho escrito), las cuales fueron entregadas con sustento en la buena fe, y con factura comercial emitida por la compañía en Estados Unidos, además del conocimiento de embarque o B/L (Bill of lading) y carta de porte o Shipper's Letter of Instructions. Entre las partes se

celebró un contrato de compraventa “*Formal Quote-Cotización 149058*” mediante el cual el demandante se comprometió a realizar la entrega de las mercancías relacionadas y por su parte la demandada se obligó a pagar la suma de USD\$184.624 y la factura No 123402 estipulaba como fecha máxima de pago 90 días después de emitida.

Dice que la negociación se realizó con base en el INCOTERM “*CFR-COST AND FREIGHT*” lo cual significa que la obligación del demandante era la de pagar los gastos y fletes necesarios para que la mercancía llegara al puerto de destino convenido, tal como se cumplió.

Cuenta que de acuerdo a la información contenida en el conocimiento de embarque o Bill of lading No ECCI-CHS-COBUN-04-542733, la mercancía fue embarcada el “*23 de junio de 2014*” desde las instalaciones del demandante ubicadas en la 726 South Main Street-Cheshire, Connecticut-Estados Unidos hacia Colombia en el Puerto de Buenaventura, donde fueron recibidas por la demandada efectivamente el “*30 de mayo de 2014*” según documento de confirmación FCL BOOKING CONFIRMATION 04-542733. Señala que la demandada hizo un abono el 28 de noviembre de 2014 por USD\$20.000 imputados a la factura No 123402, y a la fecha adeuda USD\$164.618,05.

Informa que el 24 de junio de 2020 se adelantó audiencia de conciliación extrajudicial sin lograr acuerdo. Y finalmente hace la estimación juramentada establecida en el artículo 206 del C.G.P.

### **3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA**

Admitida la demanda inicial el 29 de octubre de 2020 y su reforma, previa subsanación, el 01 de diciembre de 2021 (archivos 12Auto admite demanda y 34 Auto admite reforma/carpeta 01PrimeraInstancia), la parte demandada se pronunció (archivo 16 Contestación Demanda/carpeta 01PrimeraInstancia) diciendo que los hechos no le constan, pues aun cuando en la demanda se habla de una venta en el año 2014 aportando documentación al respecto, la realidad es que al asumir la gerencia el señor JESÚS ANTONIO PALACIO MEJÍA en el año 2015, no reposaba informe, ni estados de cuenta o libros de la empresa, donde se registrara pendiente de pago valor alguno a la demandante, ni reporte de

mercancía recibida, lo cual hace pensar, tal vez, de una operación entre el demandante y el señor PEDRO JUAN PALACIO MEJÍA a título personal, siendo inexistente para la demandada.

Se opone a las pretensiones y formula excepciones previas que fueron resueltas en forma negativa y de mérito que denominó. 1. PRESCRIPCIÓN. Sin que se considere confesión. 2. NO CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O DEL TÍTULO VALOR INDISPENSABLE PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE LA SUPUESTA OBLIGACIÓN. No existió la operación mercantil narrada entre las involucradas. 3. COBRO DE LO NO DEBIDO. El apoderado de la demandante no tiene facultades para establecer el juramento estimatorio, entonces es nulo.

#### **4. ACTUACIÓN PROCESAL**

Integrada la litis, se corrió traslado de las excepciones, que fueron objeto de pronunciamiento por la parte demandante, se convocó a audiencia inicial, que se llevó a cabo el 18 de octubre de 2022, según auto y grabación de la misma (en en el acta aparece 08 de octubre de 2022), sesión en la que se agotaron las etapas de conciliación, interrogatorios de parte, fijación del litigio, saneamiento, se decretaron pruebas y se fijó fecha para continuarla el 14 de febrero de 2023, donde se escuchó alegatos y se profirió el fallo, decretando la existencia del contrato, el incumplimiento por la parte demandada y, la condena a pagar el valor de la mercancía más intereses.

#### **5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Agotado el trámite procesal, el juez procede a decidir (archivo 49-Grabación 2ª parte-sentencia) indicando que se reúnen los presupuestos necesarios para proferir decisión, hace alusión a las pretensiones y hechos narrados en la demanda, señala el marco normativo, refiriéndose al contrato de compra venta y sus elementos, al efecto de las obligaciones, a la condición resolutoria en caso de pretender cumplimiento o resolución. Anuncia los requisitos para la prosperidad de la condición resolutoria, trayendo a colación jurisprudencia.

Aborda el caso concreto y se refiere a las pruebas aportadas por la demandante, al interrogatorio de parte, a la factura del 23 junio de 2014 No 123402 (archivo 10), donde se señala que el vencimiento será 90 días después de su emisión y en la que se describe la mercancía (la menciona), remitente la demandante y destinataria la demandada, precisando que el valor incluye el transporte marítimo y el valor es de USD\$184.624. Hace referencia a la copia del conocimiento de embarque 04542733, donde se identifica a las partes, la mercancía y la fecha en que embarca; también a la carta de instrucciones; la confirmación de reserva con fecha estimada de entrega 14 de julio de 2014; a la **cotización 149058** documento que tiene fecha 27 de mayo de 2014 y como número de orden 149058, a quien se le vendió, el valor de USD\$184.800, con fecha estimada de embarque 23 de junio de 2014, señalando los términos y condiciones, y en señal de aceptación firma PEDRO JUAN PALACIO como gerente, con un sello que corresponde a SIGMAPLAS cuyo Nit concuerda con el que figura en el certificado de existencia y representación legal.

Considera el *a quo* que con la **cotización 149058** y demás documentos se acredita una negociación entre la demandante y la demandada, así como con la factura 123402 del 23 de junio de 2014, demostrando la compraventa. Entre tanto la demandada niega la negociación, pero no aporta prueba alguna que la desvirtúe ni explica de manera satisfactoria la firma del documento por parte del gerente de la entidad, ni el contenido de los demás documentos, mostrándose ajena a la negociación, no aporta elementos de juicio que desvirtúen la negociación.

Pasa a analizar las excepciones, iniciando con la prescripción que planteó la demandada, diciendo que se formuló de manera general sin concretar nada al respecto, y el juzgado no advirtió su configuración, pues se reclama el pago de una obligación del año 2014 y la demanda se presentó en el año 2020, por ende, no han transcurrido 10 años. Sobre la segunda excepción de no configuración del contrato de compraventa, se tiene que la demandada no aportó prueba que desvirtúe la documentación allegada con la demanda. En relación con la tercera excepción que se refiere al cobro de lo no debido, se

advierte que se alude al poder otorgado y sobre el juramento estimatorio, pero no a la obligación principal.

Indica que la demandante solicita se condene al pago de intereses comerciales moratorios sobre \$310'232.592, a la tasa representativa del 23 de junio del 2014, sobre esta solicitud considera el *a quo* que se debe acudir al interés pactado según la factura del 23 de junio de 2014 donde se estipuló en 1.5%, y así se liquidará, resultando \$468'451.205,80.

Así concluye que, sí existió contrato de compraventa entre las partes, hubo incumplimiento por la demandada, condenándola a pagar el precio en pesos colombianos a \$310'232.592 más los intereses por mora pactados al 1.5% desde el 24 de septiembre de 2014 a 14 de febrero de 2023 asciende a \$468'451.205,80, más los que se generen en lo sucesivo hasta el pago total de la obligación, condena en costas a la demandada.

## **6. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN**

La decisión tomada en primera instancia, fue objeto de recurso por la parte demandada, quien en el acto de audiencia expuso reparos que fueron ampliados en escrito allegado en tiempo y se sustentaron en esta instancia, y se compendian así:

**(i) Indebida valoración de la prueba documental.** Porque se basó en documento-cotización- el cual considera el Despacho contiene la traducción, pero, a pesar que el documento contiene palabras en español, no tiene traducción oficial, pues no hay sello de traductor oficial y por ello no puede tener efectos (art. 251 C.G.P.). Y este documento "*formal quote*"- cotización, desde el punto de vista jurídico no obliga al destinatario, salvo que se trate de una oferta comercial siempre que haya aceptación.

Los demás documentos, si bien están traducidos al idioma castellano, no constituyen plena prueba porque no hay constancia de que se hubieran aceptado y recibido, tampoco hay prueba de remisión de esos documentos, ni de la factura, ni del conocimiento de embarque, ni la lista de mercancías, no estando aceptadas ni recibidas, siendo carga de la demandante acreditar

que efectivamente esos documentos fueron remitidos a la demandada o fueron aceptados por ella. Y el porte y conocimiento de embarque acreditan un contrato de transporte (art. 1021 C. de Co) que no fue aceptado por la demandada (art. 1008 ib.)

**(ii) No se aplicó adecuadamente la carga de la prueba.** La carga era del demandante y no de la demandada; el juez en sus consideraciones, además de dar valor a unos documentos que no lo tienen, señaló que la demandada no hizo esfuerzo probatorio para demostrar la inexistencia del contrato, pero ante la negación indefinida de haber recibido mercancías o la existencia del contrato, la parte actora debía probar lo contrario, y en el proceso no hay prueba o indicio, sin lugar a dudas, que el contrato existió o que se ejecutó de alguna manera con la aprobación de la demandada, y sin este presupuesto procedía la desestimación. Solicitando entonces se revoque la sentencia.

Por su parte la demandante, ante esta instancia describió el traslado del recurso señalando que el argumento relativo a que la factura no cuenta con constancia de recibo ni ostenta los requisitos de ley para que sea tenido como título valor, es equivocado, por cuanto el objeto del proceso no es el cobro de la factura, sino que esta se aporta para demostrar la intención de las partes de celebrar un negocio jurídico y la existencia de una obligación, como lo entendió el juez, quien valoró la factura en conjunto con las demás pruebas. Siendo prueba también la cadena de correos que la demandante aportó al pronunciarse frente a la contestación a la demanda.

En relación con la cotización, afirma que arrimó al plenario la traducción oficial de todos los documentos, tal como se puede corroborar en el archivo 10 del expediente, con el sello de la traducción oficial efectuada por interprete oficial y la cotización No 149058, que dice el recurrente no tiene traducción, contiene en idioma español todas las obligaciones de las partes en virtud del negocio jurídico, además, fue suscrita por el representante legal de la época, señor PEDRO JUAN PALACIO.

Señala que todos los documentos adjuntos a la demanda demuestran que las partes acordaron desarrollar un negocio jurídico de compraventa, por ello se deben valorar en conjunto y no aisladamente.

Finalmente advierte que el recurrente confunde el concepto de carga de la prueba, pues la parte actora probó sus dichos y la demandada no logró desvirtuar la existencia del contrato y el incumplimiento de lo pactado, pues al contestar la demanda no alegó lo que ahora en el recurso plantea sobre la falta de traducción de la cotización. Igual ocurre con el concepto de negaciones indefinidas, pues ello no es simplemente negar, sino la imposibilidad de probar en la práctica o por que el hecho es indeterminable en el tiempo.

## **II. CONSIDERACIONES**

### **1. PRESUPUESTOS PROCESALES**

Conforme la ley procedimental, el trámite del proceso se adelantó con el cumplimiento de los presupuestos necesarios que permiten dar validez a lo actuado, y es este Tribunal Superior a través de la Sala Tercera de decisión civil, competente para desatar el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada, a quien le fue desfavorable el fallo emitido por el iudex a quo dentro del proceso de la referencia.

### **2. PROBLEMA JURÍDICO**

Debe la Sala determinar si se estableció la existencia del contrato de compraventa de mercancía y su incumplimiento por parte de la demandada como lo reclama la demandante y concluyó el *a quo*, o si no se acreditó la existencia de tal contrato, y si la valoración probatoria fue inadecuada para acceder a las pretensiones, conforme reprocha la parte demandada recurrente en alzada.

### **3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL**

#### **3.1. EL CONTRATO**

El Código Civil en el artículo 1495 define el contrato en los siguientes términos *“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga*



*para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas.”*

Celebrado en forma legal un contrato, éste será ley para los contratantes y no podrá ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales, así lo establece el artículo 1602 *ibídem* que regula el efecto de las obligaciones.

Esta eficacia se edifica sobre varios principios como son: autonomía de la voluntad, relatividad del contrato, obligatoriedad contractual y responsabilidad contractual. Autonomía privada que ha sido protegida por la Corte Constitucional en varias oportunidades, como quiera que se deduce de varios derechos, como el derecho a la personalidad jurídica, a la propiedad privada, libertad de asociación, etc, y como consecuencia de ella la libertad contractual que está sometida a condiciones y límites impuestos por el Estado Social, el interés público y el respeto por los derechos de los demás asociados.

### **3. 2. DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA**

De conformidad con el artículo 1849 del Código Civil *“La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio.”* Definición en iguales términos contenida en el artículo 905 del Código de Comercio.

Como toda convención, entre otros requisitos, se exige que quienes intervengan en él sean capaces. Y en lo que al perfeccionamiento del mismo respecta, establece el artículo 1857 del C.C. que la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo algunas excepciones entre las que se encuentra la venta de los bienes raíces, para cuyo perfeccionamiento se exige el otorgamiento de la escritura pública.

### **3.3. DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA**

El Código Civil en su artículo 1546 regula la condición resolutoria tácita en los siguientes términos: *“En los contratos bilaterales va envuelta la condición*

*resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”.*

La jurisprudencia nacional se ha pronunciado sobre este precepto en reiteradas oportunidades para fijar el alcance y sentido de la misma, sosteniendo que son presupuestos indispensables, para la prosperidad de la acción resolutoria: a) que, el contrato sea bilateral y válido, b) que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o que haya estado dispuesto a cumplirlas, y c) que el otro contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponde (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de noviembre de 1979). Esta norma debe interpretarse en concordancia con el artículo 1609 del mismo Estatuto, es así como el contratante cumplido o que haya estado dispuesto a cumplir está legitimado para pretender la resolución del contrato. Véase SC2307-2018 y SC5430-2021.

### **III. CASO CONCRETO**

Conforme lo estipulado en los artículos 322 y 328 del Código General del Proceso, el Tribunal se limitará a los puntos que han sido planteados como inconformidades en contra de la sentencia que es objeto de alzada, los cuales fueron sustentados en la oportunidad concedida en esta instancia.

Los reproches planteados por la parte demandada recurrente contra la sentencia de primer grado se pueden resumir en dos tópicos esenciales, el primero, la aducida indebida valoración probatoria de los documentos arrimados al plenario por la parte demandante y, el segundo, la errada aplicación de la carga de la prueba.

En el reparo por indebida valoración probatoria señala la parte recurrente que la factura de venta arrimada al plenario, no cumple con los requisitos legales para ser considerada como título valor o título ejecutivo y, al no tener constancia de aceptación o recibido, no constituye prueba contra el deudor, no pudiendo entonces ser tenida en cuenta por el despacho para

acceder a las pretensiones de la demanda; que la cotización no tiene traducción oficial; los demás documentos arrimados no dan cuenta de una compra por parte de la demandada y, el porte y conocimiento de embarque demuestran un contrato de transporte en el que la demandada no fue parte, no existiendo prueba de que ésta hubiese aceptado ser destinataria.

Sobre el primer aspecto debe decir la Sala que el cumplimiento de los requisitos del título valor factura es indispensable **únicamente** cuando se pretende adelantar una acción ejecutiva con sustento en dicho título, no así, para arrimarlo como prueba en un proceso declarativo. Es que, de existir un documento con las características plenas para prestar mérito ejecutivo, absurdo sería que la parte demandante incoe primero la acción declarativa encaminada a que se reconozca la existencia de la acreencia y no acuda directamente a la acción ejecutiva, por lo tanto, resultaría también desproporcionado exigirle a la demandante que la factura arrimada cumpla con las exigencias legales de dicho título valor para soportar su pretensión declarativa como pretende la recurrente.

Ahora, cosa distinta es el alcance que ese documento tenga en este proceso declarativo como una prueba más de la existencia de la obligación, pues lo que debe analizar el juez en este caso es, no que de ese documento se desprenda la existencia de una obligación clara, expresa y exigible como se requiere en un proceso ejecutivo; sino, que el mismo, **junto con el demás material probatorio arrimado**, sea documental o de otro tipo, tenga la contundencia necesaria para declarar la existencia del negocio, contrato u obligación entre las partes, de modo pues que, inadecuado también resulta, como aspira la parte recurrente, analizar de forma aislada la factura arrimada por la parte demandante y, con ese análisis separado, descartarla como prueba del negocio.

Sobre este tema del valor probatorio de un título valor en un proceso declarativo, pertinente resulta traer a colación lo expuesto por nuestro máximo órgano de decisión civil en sentencia SC15032-2017<sup>1</sup> al señalar que, cuando una factura u otro título valor se aporta como prueba a un proceso

---

<sup>1</sup> SC15032-2017. Radicación n° 08001-31-03-002-2011-00049-01. M.P. Luis Alonso Rico Puerta

declarativo, no puede exigirse el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción ejecutiva, sino estudiarlo como una prueba documental más, allí expuso la Corte:

*“4.2. Pues bien, aunque el concepto de proceso judicial, en términos generales, hace referencia a una serie de actos coordinados y preestablecidos en el ordenamiento jurídico, dirigidos a obtener un pronunciamiento de fondo, con el cual se resuelva la controversia de intereses suscitada y sometida a la jurisdicción del Estado, existen diferencias entre el que busca concretar un derecho hipotético y aquel por medio del cual se pretende hacer efectivo un derecho cierto o formalmente probado. El primer evento alude al proceso declarativo y el segundo, al ejecutivo.*

*Aquel, por tanto, tiene como finalidad que se declare la existencia de un derecho subjetivo carente de certeza, se modifique o extinga una relación jurídica presente y de ser el caso, se imparta orden al deudor para que satisfaga una determinada prestación.*

*Éste, por su parte, se encamina a lograr el cumplimiento coactivo de una obligación expresa, clara y exigible contenida en documento que constituya plena prueba de ella, a cargo del deudor.*

*4.3. Generalmente, cuando se acude a un proceso judicial, cada uno de los extremos de la contención jurídica le presenta al juzgador su propia versión de los hechos sobre los cuales edifica sus pretensiones, aspirando a una definición favorable de ellas.*

*En tales casos, como el juez ignora la realidad acontecida, el orden jurídico le ha impuesto a las partes el deber de contribuir a dilucidar el asunto debatido; al promotor del litigio, presentando de manera oportuna y con observancia de las ritualidades legalmente establecidas, elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones y al convocado, desplegando igual conducta, en favor de sus defensas, todo encaminado a deducir la consecuencia jurídica prevista en las normas sustanciales invocadas.*

*Cuando de acreditar la existencia o extinción de obligaciones se trata, le incumbe probar aquella o ésta a quien alega el respectivo acontecimiento, según lo dispone el artículo 1757 del Código Civil, exigencia acorde con la regla probatoria consagrada en el artículo 177 del C. de P.C., previsión recogida en el primer inciso del precepto 167 del Código General del Proceso, según el cual, «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».*

*Así entonces, tratándose del juicio coactivo, como la pretensión se dirige a efectivizar un derecho cierto, la prueba de la obligación, por excelencia, será un título con mérito ejecutivo, en tanto que la del declarativo, podrá ser cualquiera de las legalmente previstas en el artículo 165 ibídem, sustituto del 175 de la Codificación Procesal Civil, es decir, «la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez».*

De modo pues que, en este caso, donde la pretensión es **declarativa** y, por ende, la legislación no establece la necesidad de partir de la presentación de un título ejecutivo, el análisis probatorio no debe centrarse en un solo documento, mucho menos exigir de éste la existencia de una obligación clara, expresa y exigible o los requisitos de determinado título valor; sino, que debe ser un estudio probatorio conjunto de todo el material probatorio recaudado, habiendo aportado, en el sub examine, la parte demandante, otros documentos que dan cuenta del negocio celebrado con la demandada, como se analizará más adelante.

Arguye la demandada también que el documento denominado cotización No.149058, no se encuentra traducido al idioma castellano por traductor oficial, no pudiendo entonces ser apreciado como prueba al interior del proceso.

Para abordar el tópico de la prueba documental en idioma extranjero es indispensable traer a colación el artículo 251 del Código General del Proceso que regula la materia y dispone:

***“Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.***

*Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.*

*Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país”* (Resaltado intencional).

En el caso bajo examen la parte demandante aportó varios documentos en idioma extranjero, estos son: (i) Factura o Commercial Invoice N°123402 de fecha 23 de junio de 2014; (ii) Conocimiento de Embarque o Bill of Landing N°ECCI-CHS-COBUN-04-542733; (iii) Carta de Porte o Shipper's Letter of Instrucciones de fecha 27 de mayo de 2014; (iv) FCL Booking Confirmation 04-542733 de fecha 30 de mayo de 2014 y (iv) Lista de empaque – Orden de Compra 149058. Habiendo anexado con el escrito de subsanación la constancia de traducción por interprete oficial (pdf 10 anexos subsanación), lo que implica que puedan ser tenidos válidamente como prueba en el plenario.

En la anterior relación no obra la cotización No.149058, pero ello tiene una explicación sencilla, y es que, no puede catalogarse como un documento otorgado en idioma extranjero que requiera traducción, pues basta detallar la misma, que milita a folio 22 del pfd 03 demanda, para denotar que dicho documento fue otorgado tanto en inglés como en español, esto, porque la información que se consigna en inglés seguidamente se plasma en español, en unos casos entre paréntesis ( ) y, en otros a continuación de una barra diagonal (/), lo que implica que fue otorgado en ambos idiomas, permitiendo perfectamente conocer su contenido en los dos idiomas sin necesidad de traducción.

En el referido documento se lee perfectamente en idioma español o castellano, entre otros, la fecha; el número de orden de compra; el número de identificación; la descripción de la mercancía: LDPE<sup>2</sup>; la empresa remitente: Latin American Polymers LLC-LAP, la empresa destinataria: Sigmaplas S.A., la fecha estimada de embarque (23/06/2014) y, lo que es más importante, los “*Terminos (sic) y Condiciones de Venta*” firmados por el señor Pedro Juan Palacio como Gerente de Sigmaplas junto con el sello de dicha empresa, términos y condiciones donde consta, en español expresamente: “*el despacho de esta orden de venta constituye una aceptación irrevocable, por parte del comprador, por lo cual no está sujeta a cancelación ni a variación de precios una vez aceptada y/o despachada*”; “*Declaramos bajo juramento que la persona que firma este documento lo hace en representación de la empresa y por lo tanto se constituye*

---

<sup>2</sup> Polietileno de baja densidad.

*responsable por parte de la empresa de todos los compromisos derivados de dicho contrato de venta”.*

Lo anterior, contrario a lo afirmado por la parte demandada recurrente, junto con los demás documentos aportados al plenario, sí demuestra la existencia del contrato porque, la cotización está en idioma español o castellano, detalla los términos y condiciones de la negociación entre Latin American Polymers LLC-LAP y Sigmaplas S.A. ahora S.A.S., que actuó a través del gerente para el momento de la negociación, señor Pedro Juan Palacio y, donde se señala, que el despacho de la mercancía constituye la aceptación irrevocable de la venta, habiendo acreditado debidamente la demandante el referido despacho mediante los otros documentos arrimados con constancia de traducción oficial, esto es, el Conocimiento de Embarque o Bill of Landing N°ECCI-CHS-COBUN-04-542733; la Carta de Porte o Shipper's Letter of Instrucciones de fecha 27 de mayo de 2014; el FCL Booking Confirmation 04-542733 de fecha 30 de mayo de 2014 y la Lista de empaque – Orden de Compra 149058.

Aduce también la parte demandada que, los demás documentos no debieron ser valorados por el juez de primer grado y no dan cuenta de una compra, ni de aceptación o recibo de la mercancía por parte de la demandada, pues ni siquiera se encuentran suscritos por el destinatario, además que, el porte y conocimiento de embarque acreditan un contrato de transporte en el cual la demandada no fue parte, sin que exista prueba que ésta aprobó o aceptó ser destinataria, para cuyo efecto cita el artículo 1008 del Código de Comercio.

El anterior reparo también debe ser despachado desfavorablemente por la Sala porque, contrario a lo alegado por la inconforme, no existía impedimento alguno para que el juez valorara dicha documentación, en tanto, los documentos no fueron desconocidos, tachados de falsos o solicitado su reconocimiento, esto es, en general, la demandada no ejerció ninguna contradicción frente a dichos legajos en los términos establecidos en los artículos 265 a 273 del C.G.P., debiendo darse valor al contenido de los mismos, del cual se desprende que el representante legal de la empresa demandada realizó una cotización con la demandante para la compra del

producto denominado LDPE 1.8 MI/ .922 Density LDPE Slip & Antiblock Clarity 39.01.10 en cantidad de 105000 unidades por valor de 184800 Dólares de los Estados Unidos; que la demandante acordó remitir el producto asumiendo todos los gastos y fletes necesarios (condición CFR)<sup>3</sup>, en cuya virtud, negoció con Econocaribe el envío del producto desde la ciudad de Cheshire en los Estados Unidos al Puerto de Buenaventura en Colombia, habiendo pagado de forma anticipada el envío de las mercancías reseñadas a Econocaribe y por intermedio de dicha empresa las remitió a Sigmaplas S.A.S.<sup>4</sup>.

Aunque es verdad, como aduce la recurrente que no existe prueba de que la demandada Sigmaplas S.A.S. haya sido enterada del Conocimiento de Embarque, lo cierto es que en el plenario quedó plenamente demostrado el cumplimiento de las obligaciones por parte de la demandante Latin American Polymers LLC, que se comprometió a pagar los fletes y gastos necesarios para que la mercancía llegara a puerto, lo que no fue desconocido, ni tampoco refutado con otro medio de prueba por la demandada, quien perfectamente pudo procurar demostrar, por ejemplo, con citación de Econocaribe, que por falta de información sobre el embarque la mercancía no pudo ser reclamada, pero la inactividad de la demandada en este proceso fue absoluta.

Ahora, el hecho de que la demandada Sigmaplas S.A.S. no haya sido parte en el contrato de transporte celebrado entre Latin American Polymers LLC y Econocaribe, no resulta relevante, en tanto en este proceso no se está discutiendo el contrato de transporte de mercancías, sino, la existencia de un contrato de compraventa y el cumplimiento de las obligaciones por parte de Latin American Polymers LLC, lo que quedó demostrado.

Reprocha la parte demandada también que, el juez de primer grado realizó una inadecuada aplicación de la carga de la prueba, reparo que tampoco se comparte porque, aunque es verdad que a la parte demandante correspondía demostrar la existencia del contrato y, que la inexistencia de éste es una negación indefinida exenta de prueba. Lo cierto es que en este caso la parte

---

<sup>3</sup> Confrontar folios 22 a 24 PDF demanda. Cuaderno primera instancia.

<sup>4</sup> Ver folios 6 a 15 PDF anexos subsanación cuaderno primera instancia



demandante sí cumplió con su carga probatoria, como se reseñó en precedencia y lo analizó adecuadamente el juez de primer grado; siendo diferente lo que realmente increpó el juez de primera instancia; pues ello consistió en que la parte demandada tenía la carga de **demostrar sus excepciones**, lo que no hizo; es que aunque el apoderado de Sigmapias S.A.S. insistió en la inexistencia del contrato bajo el amparo de una negación indefinida exenta de prueba, algunas de las manifestaciones contenidas en sus defensas sí eran susceptibles de prueba, a pesar de lo cual asumió una actitud completamente pasiva en materia probatoria.

Véase que la parte demandada alegó que, cuando el actual representante legal asumió la compañía no reposaba en los libros de la empresa un pendiente de pago a favor de la demandante, a pesar de lo cual no aportaron los referidos libros, prueba que resultaba totalmente pertinente para establecer dicha afirmación. También dijo la demandada que, posiblemente, se trató de una operación que a título personal realizó el anterior representante legal señor Pedro Juan Palacio Mejía, pero no procuró prueba en dicho sentido, habiendo podido solicitar, entre otros, el testimonio del referido señor Palacio Mejía, lo que tampoco hizo.

Es que la carga de prueba no implica únicamente que la parte demandante demuestre sus pretensiones, sino que las partes, en general, prueben el efecto jurídico que desean, así se desprende claramente del artículo 167 del Código General del Proceso. De modo que, si el efecto jurídico deseado por la parte demandada era que el contrato no se había celebrado por Sigmapias porque el anterior gerente lo celebró a título personal y, existiendo prueba documental arrimada por la parte demandante del compromiso de éste a nombre de esa sociedad, debió la demandada arrimar entonces prueba de mayor contundencia que permitiera derribar esa declaración contenida en los documentos aportados por la demandante, lo que se reitera, no realizó.

Sobre el entendimiento completo del concepto de carga de la prueba en materia civil, resulta pertinente traer a colación lo expresado por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil<sup>5</sup>, así:

---

<sup>5</sup> SC065-2023. Radicación n° 05001-31-03-005-2010-00259-01 M.P. Hilda González Neira

*“5.1.1. A voces del artículo 167 del Código General del Proceso «[I]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». **Disposición que consagra el principio de carga de la prueba, determinando lo que cada parte debe probar para obtener éxito en el proceso, es decir, los hechos que según el tema de la prueba deba ser acreditado para abrir paso a las pretensiones o las excepciones**, sin desconocer la facultad que la misma norma confiere a los juzgadores para adoptar medidas de distribución, aplicando lo que se denomina “carga dinámica de la prueba”, o decretar de oficio las que estime pertinentes, como tampoco los eximentes legalmente autorizados, como cuando se planteen hechos notorios, negaciones o afirmaciones indefinidas, o se reconozca en favor de determinado sujeto procesal una presunción iuris et de iure o las denominadas “legales” o “iuris tantum”, debiendo en estos últimos supuestos demostrar únicamente el supuesto descrito en la norma para que la “presunción” se configure.*

*Significa esto, que el principio de la carga de la prueba está ligado al deber que tienen los intervinientes en los procesos de demostrar los supuestos fácticos que soportan sus reclamaciones, para que el juez pueda definir la controversia sometida a su consideración, amen que todas las decisiones judiciales deben estar soportadas en las pruebas regular y oportunamente allegadas al juicio, sea que se deban incorporar al expediente a iniciativa de las partes, de oficio por el juez, o que el ordenamiento autorice la presunción del hecho controvertido, cuya desatención apareja consecuencias adversas para el litigante que la incumpla” (Resaltado intencional).*

Lo analizado en precedencia implica que, la parte demandante sí cumplió con la carga probatoria que le correspondía, en el sentido de demostrar la existencia del contrato celebrado con la sociedad demandada, porque arrimó debidamente traducidos los documentos que lo requerían, no siendo necesario ello respecto de la cotización No.149058 por haber sido otorgada tanto en español como en inglés; pudiendo también tenerse como prueba adicional sobre la negociación, la factura arrimada, sin necesidad de exigir el cumplimiento de los requisitos de dicho título valor, por tratarse el presente de un proceso declarativo no ejecutivo y, la parte demandada no demostró los hechos en los que fundó sus excepciones.

Es así entonces como la parte recurrente tampoco logró enervar las consideraciones expuestas en la decisión de primera instancia, por tanto, esta Corporación procederá a la CONFIRMACIÓN de la misma.

## **COSTAS**

Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada a quien no le prosperó el recurso (artículo 365 C.G.P.)

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**FALLA**

**PRIMERO. CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia proferida en audiencia celebrada el 14 de febrero de 2023 por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUTO DE ITAGÜÍ-ANTIOQUIA**

**SEGUNDO. CONDENAR** en costas de segunda instancia a la parte demandada a quien no le prosperó el recurso.

Como decisión de la ponente se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma equivalente a DOS SMLMV (Acuerdo No. PSAA16-10554 CS de la J).

**TERCERO.** En firme esta decisión, devuélvase el proceso al despacho de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE  
Los Magistrados,**

**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

**NATTAN NISIMBLAT MURILLO**

**ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA**

**Firmado Por:**

**Martha Cecilia Ospina Patiño**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 007 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Alba Lucia Goyeneche Guevara**  
**Magistrada**  
**Sala Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Nattan Nisimblat Murillo**  
**Magistrado**  
**Sala 010 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c99a5d62a8e427f3b284bd0a5cb73601dde9aa18429a6a6761d16044341bb14c**

Documento generado en 15/08/2023 01:38:26 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**